

Instalación

Palabras del Presidente de la Junta Directiva de Fedepalma

Words by the Chairman of the Board of Directors of Fedepalma

César De Hart Vengoechea

Me siento honrado por el privilegio de representar a Fedepalma en este acto en la ciudad de Barranquilla.

Señor Ministro, muy especialmente le agradecemos su presencia, lo mismo que al doctor Rafael Mejía, Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, por acompañarnos.

Difícil es establecer un equilibrado enfoque entre los intereses empresariales, los asuntos gremiales, los temas sectoriales y el acontecer nacional. Igual reto encierra el acto cercano al malavarismo de transmitir entusiasmo en medio de la situación que vivimos, debido a que en Colombia rechazamos las posiciones críticas con el rótulo de negativas, pues éstas conducen a la verdad, y la nuestra no es bonita.

El empresario, lo mismo que el gobernante, no puede ser exitoso si incurre en el desconocimiento de la realidad. Tiene que repeler tanto al optimismo como al negativismo, pues ambas son desviaciones de la realidad, aunque en diferentes sentidos. A lo que no puede renunciar jamás el empresario es al entusiasmo, aun para enfrentar las situaciones más adversas.

Sólo con esa doble óptica, tanto crítica como entusiasta, podemos diseñar estrategias y acciones realistas y efectivas.

Nuestro sector, curtido en las lides de las dificultades de la crisis vivida hace una década, como consecuencia del manejo que se le dio a la apertura económica, y más aún por la aparición de los primeros excedentes de producción, hoy día, silenciosa y estoicamente soporta una depresión de precios quizás sin antecedentes en la historia de la palma de aceite en Colombia.

Para visualizar lo que acontece, basta con señalar que hace dos años la cotización internacional del aceite de la palma era cercana a los US\$700 por kilogramo y que hoy se encuentra en el orden de US\$230 como consecuencia de las condiciones de oferta y demanda del mercado.

El palmicultor de tradición, educado en una cultura de largo plazo y conocedor de esa característica volátil de los precios del aceite, tiene la mentalidad y el compromiso para enfrentar este reto, reto que es justo reconocer, ha sido amortiguado por el esquema institucional creado por Fedepalma, en este caso el Fondo de

En la Instalación del XXIX Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite. Barranquilla, 6 de Junio de 2001.

Estabilización de Precios, que logró, junto con las franjas arancelarias, que mientras la cotización internacional descendía a la tercera parte, el palmicultor sólo registrara una disminución de su precio de una tercera parte. Pero esta situación sí es una insoslayable señal de alerta, tanto para el sector oficial como para el privado, de que los escollos para desarrollar la palma de aceite no se limitan a la superación del largo período improductivo inicial que a su vez exige altas inversiones.

La palma de aceite, como se ha visto en Malasia, ofrece oportunidades especialmente atractivas para Colombia que deben ser aprovechadas. El concepto de los núcleos de producción y las alianzas para su explotación, que permite unificar su operación a gran escala sin concentrar la propiedad, obviamente son el vehículo apropiado para popularizar esta actividad que tanto bienestar puede irradiar. Pero una cosa es popularizarlo y otra muy distinta es incurrir en el populismo, aun inadvertidamente y con las mejores intenciones. Y este comentario no va dirigido al sector público únicamente. El sector privado, en su legítimo afán de crecimiento y búsqueda de alternativas estratégicas para su crecimiento, puede pagar un precio muy caro por no evaluar en toda su magnitud las consecuencias de esa volatilidad de los precios. Las frustraciones que se pueden incubar pueden ser muy grandes.

Esa volatilidad de precios exige de un cultivador, por pequeño que éste sea, con mentalidad de empresario, dueño de su propio destino y consciente de sus propios riesgos, estar despojado de actitudes asistencialistas indefinidas que son incompatibles con el desarrollo de la palma de aceite.

Esta reflexión señala que el desarrollo de la palma de aceite exige un compromiso oficial, de carácter institucional, adicional a conducir de la

mano al productor campesino durante el período improductivo.

Si queremos y se nos pide competitividad, hay que estimular la iniciativa privada. Y resulta un contrasentido pretender que nazca la iniciativa privada en presencia de políticas discriminatorias contra la ya existente, como sucede actualmente. El asistencialismo y el florecimiento de la iniciativa privada son incompatibles.

El postulado del fortalecimiento de una agricultura más competitiva pone en evidencia la urgencia de armonizar la economía campesina con la agricultura empresarial de gran escala, sin desconocer la positiva relación entre la empresa agrícola, el empleo y el ingreso rural.



Y para ser consistentemente contradictorios, lo mismo sucede con el trato de mejor familia otorgado a la inversión extranjera frente a la nacional. Desde luego que es bienvenida la inversión extranjera. Tiene el atractivo del supuesto implícito que viene acompañada de tecnología. Pero, y ¿qué decir del nivel de compromiso y conocimiento del entorno de la inversión nacional? Para ponerlo en términos concretos, ¿qué es más perjudicial para el país: un millón de dólares de inversión extranjera que no llegue, o un millón de dólares nacionales que se vaya?

Tal vez el contraste entre el entusiasmo y despliegue publicitario con que partió hace tres meses la misión oficial de vista a Malasia con el propósito de atraer inversión extranjera y el elocuente silencio al regreso, en algo ilustre lo expresado.

La crisis de precios impone un gran reto de competitividad para el sector. Su contraparte son los costos. Si de reducirlos se trata, tal vez vale la pena revisar las estructuras administrativas al interior de las empresas. Justificadamente hemos dedicado mucha atención al funcionamiento del campo y de las plantas de beneficio y no hemos

dedicado suficiente esfuerzo al análisis de los esquemas administrativos.

Resulta que en Colombia, donde demagógicamente está vigente el debate sobre la concentración de riqueza en el campo, las áreas de cultivo son muy pequeñas para la estructura administrativa que deben soportar, lo que aumenta los costos unitarios. Por lo tanto, la alternativa de alianzas estratégicas reviste especial interés para romper paradigmas administrativos.

Otro tema digno del mayor cuidado es el surgimiento, desde finales de los años ochenta, de plantaciones que venden su producción a plantas de beneficio, que en ocasiones, a su vez, tienen una baja integración con cultivos propios. Sin embargo, la unidad de análisis, tanto operativa como estratégica, quedó anclada en la estructura tradicional de la unidad de propiedad entre planta de beneficio y cultivos.

El reto de la competitividad impone la modernización en todos los órdenes. Se ha avanzado mucho en concientizar al trabajador que es imposible su progreso sin el progreso de la empresa. Pero hemos sido tímidos en explicarles, entendible por la situación del país, que la empresa no progresa sin producir un rendimiento para el accionista. A su vez, el complemento de este planteamiento es el establecimiento de un código social y ético que proteja la integridad, bienestar y dignidad del trabajador.

Es claro que enfrentamos un reto respetable, pero igualmente lo fue el de los pioneros de este sector terminando la década de los cincuenta, o el que enfrentamos hace casi una década, cuando el entonces Ministro de Agricultura, José Antonio Ocampo, admitió que nuestro sector había sido el más dura e injustamente golpeado por la apertura, y, sin embargo, mostró unas fortalezas insospechadas y subestimadas para reaccionar con vigor.

En quince años hemos pasado de considerar buenas producciones las de 22 toneladas de fruta por hectárea, que hoy lo son de 26, 28 y 30 toneladas/hectárea. Hemos pasado de extracciones de 16-18% a niveles de 22-23%. Los obstáculos superados en ese entonces se

mostraban, en su momento, tan o más grandes que los actuales.

Este asombroso progreso se ha dado gracias al compromiso y capacidad de nuestros empresarios y a una sólida institucionalidad gremial liderada por Fedepalma que sobresale por su seriedad. Y todo esto a pesar de que según el Instituto Internacional para el Desarrollo de la Gestión, nuestro país ocupa el puesto 46, de una lista de 50, en materia de competitividad, medida según determinados parámetros.

Quiero destacar la importancia del servicio prestado por la comercializadora internacional C.I. Acepalma S.A. que no obstante en ocasiones se le acusa de darle prioridad a los intereses del proveedor productor de aceite sobre el del accionista, paradójicamente año tras año logra sólidos resultados financieros que dejarían satisfecho al más exigente inversionista del mundo, a pesar de la crisis que padece el sector. Ese resultado deja sin piso esa crítica. Es imposible pelear contra el éxito. Señala más bien la validez del debate contrario, cual es la conveniencia de consentir un poco más a su proveedor natural. Tan cierta es esta afirmación que frecuentemente los productores de aceite crudo encuentran más atractivas las ofertas de otras comercializadoras. De manera que el servicio prestado al sector ha sido excelente, tanto al proveedor como al accionista.

Vale la pena recordar que C.I. Acepalma S.A. fue creada como consecuencia de una necesidad del sector, y atender esa necesidad, que ha sido atendida, no riñe de manera alguna con su naturaleza comercial. No se puede invocar esa naturaleza comercial para evadir su alianza y compromiso con el sector palmicultor, máxime si ésta redunde en beneficio mutuo, como de hecho lo ha sido.

En cuanto a Cenipalma, su rigurosidad científica es incuestionable. Hemos logrado desarrollar un andamiaje en el que la investigación tiene como finalidad su aplicabilidad con incidencia en los resultados financieros de las empresas. Hemos superado el dilema de que la investigación es incompatible con el ánimo de lucro, y de que éste la corrompe. De otra manera no sería sostenible.

Hemos exhibido una y otra vez una gran capacidad de ajuste frente a los desafíos que se nos plantean. El que tenemos al frente no es el primero y desde luego que tampoco el último, puesto que se trata de un proceso dinámico. Consecuentes con nuestra mentalidad de largo plazo, liderados por Fedepalma hemos desarrollado la Visión 2020, en la que se plasma que el futuro no se prevee, se construye. Ese trabajo señala un rumbo coherente que debe servir de punto de referencia durante los próximos años.

Pero como lo expresé en la introducción, incurriríamos en el pecado de la ligereza si nos limitamos al análisis del balance de la situación sectorial.

De manera que no es posible ahogar las posiciones críticas, tratando que éstas se limiten a extrovertimientos en los cocteles sociales. Con frecuencia se escucha a personas que preocupadas con la situación del país afirman: ¿Yo qué puedo hacer? Lo menos que se puede hacer es opinar, opinar en todos los niveles y escenarios, en las reuniones familiares, en las juntas directivas, desde luego que en los cocteles, en las reuniones de trabajo y, muy especialmente, cuando se tiene una representación.

La opinión y posición unificada y masiva es el motor de las soluciones nacionales. Y ello no se logra sin la expresión del pensamiento individual de manera libre. No es leal quien no dice lo que piensa.

El país no logra dilucidar un camino que lo saque de la maraña de problemas sin solución a la vista. La violencia y los secuestros van en aumento, a la par de la producción de narcóticos, a pesar de las iniciativas oficiales como el Plan Colombia. La corrupción no permite mejorar la infraestructura ni la competitividad y somete a los contribuyentes a uno de los niveles más onerosos del planeta para cubrir los asaltos al erario público. No se pueden construir obras públicas sin la participación de la misma guerrilla en el serrucho, a pesar de su discurso en contra de la corrupción. El asedio guerrillero y la consecuente respuesta armada por fuera del marco institucional arrecian, causando cada vez mayores

desplazamientos y expulsiones humanas que alimentan el creciente desequilibrio rural urbano, fenómeno que recientemente se ha visto acompañado de la salida de la gente joven y más preparada hacia otras fronteras en búsqueda de oportunidades y huyéndole al caos nacional.

Hemos llegado a un peligroso deterioro y fragilidad de la institucionalidad que muestra al Gobierno, al Estado, a la Sociedad, al Establecimiento entero, sin capacidad de respuesta. El Gobierno está limitado a una débil condición reactiva ante los innumerables y complejos problemas, de tal manera que no conduce, no controla, no da garantías, no incide con capacidad de definición sobre el acontecer nacional.

Estamos cercanos al desbordamiento civil. Un desempleo cercano al 20% refuerza esta preocupación.

Justamente hace tres años en nuestro Congreso de Santa Marta afirmé:

"Nos debatimos en una especie de crisis existencial, falta de identidad, con un sentimiento de culpa colectivo por la conciencia de que la sociedad, de que sus dirigentes, de que todos somos responsables del actual estado de cosas; de tanta necesidad, pobreza y desigualdad.

El ser humano, cuando tiene sentimientos de culpa, es débil. Y si el sentimiento de culpa es colectivo, es colectivamente débil.

A su vez, la guerrilla reivindica la representación y el señalamiento de las desigualdades sociales; y nuestra culpa, sumada a la fragilidad institucional, nos conduce a reconocer esa representación y a otorgarle una interlocución legítima, no obstante las múltiples y reiteradas acciones que nos debían llevar, por lo menos, a cuestionar esa representación.

Es un hecho que no vivimos en una sociedad justa, que es imperativo hacer profundas rectificaciones. Y eso hay que hacerlo con o sin presión de la guerrilla. La principal responsabilidad de la sociedad es combatir la desigualdad y la pobreza. Por eso resulta tan mezquina la expresión de que hay que combatir

la pobreza para quitarle argumentos a la subversión.

La gran duda, la gran incertidumbre nacional, es sobre la sinceridad de la guerrilla."

Este interrogante debe ser el punto de partida de una política de Estado frente al problema subversivo. ¿Será que durante estos tres años no hemos adquirido mayor claridad sobre la respuesta?

Esta duda, que hoy día ha hecho tránsito hacia la certeza, indica el imperativo de diseñar estrategias efectivas, alternativas y paralelas a la negociación. Es una obligación con la Sociedad.

La guerrilla puede haber aumentado ostensiblemente su capacidad militar y terrorista, pero indudablemente la población ha perdido la confianza en su sinceridad, tanto en sus posiciones en el proceso de paz como en su discurso reivindicativo. De manera que la guerrilla no tiene pueblo que la acompañe, y tanto Sociedad como Gobierno hasta ahora parece que no se percatan de tan importante realidad.

Una y otra vez nos comunican que ellos a lo que aspiran es al poder. Aún más, su discurso está respaldado con sus acciones de atropello contra la población para someterla mediante el terrorismo, ya que no cuenta con su apoyo. ¿Cuál es entonces el terreno de la negociación? Sus postulados provienen del marxismo-leninismo, lo que no ocultan. En Colombia tenemos un estado democrático social de derecho, cuyos fundamentos son la libertad de expresión, la defensa de los derechos individuales, de la propiedad y de la iniciativa privada y la libre empresa. ¿Cuál es entonces el espacio de la negociación? ¿Alguien les ha oído o captado el respeto a estos preceptos? Aceptable sería, y buen terreno de entendimiento, que nos dijeran que hay que corregir las inequidades, eliminar la corrupción y los

inmerecidos privilegios, reducir la pobreza, pero respetando las bases de nuestra democracia. Hay que tener claridad sobre qué estamos dispuestos a negociar. Hay que delimitar el terreno de la negociación: ¿La libertad? ¿El sistema democrático? ¿El sistema de libre empresa? No entender que pretender negociar la paz a cualquier precio con quien quiere el poder conduce inexorablemente a la guerra, constituye una miopía extrema.

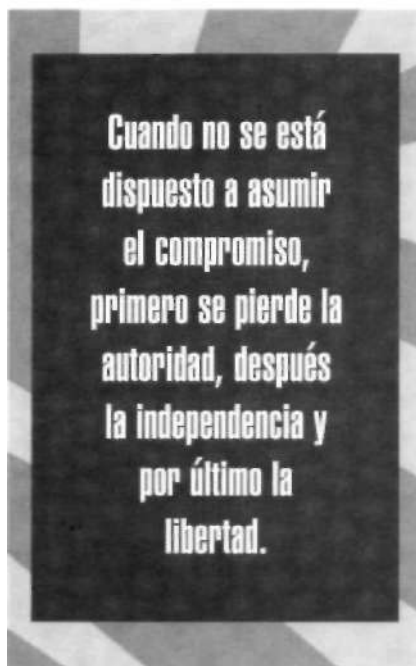
La democracia está ligada a la libertad, lo mismo que al sistema capitalista de libre empresa, con todo lo bueno y lo malo que también tiene. Lo que no podemos es seguir con la ligereza de permitir el manoseo a la democracia, al sistema de libre empresa, a la iniciativa privada, con la creencia de que el asunto se reduce a temas económicos y materiales. Bien equivocados están quienes creen que la cuestión con la guerrilla es de más o menos riqueza material. No, lo que está en juego es más o menos libertad.

Y la confusión llega al extremo de que se descalifica esta posición con el rótulo de derecha, lo mismo que si se afirmara que el anhelo de libertad que inspiró la revolución francesa era de derecha. Y en esa trampa ideológica y

conceptual cae la tan venerada comunidad internacional y nuestra despistada dirigencia.

La Sociedad, sin faltar a la tolerancia, cuando ve amenazados sus principios de libertad y el ejercicio democrático, está en la obligación de trazar una raya, más allá detrás de la cual no negocia, no transige, no contemporiza y defiende sus posiciones. No es posible sacrificar estos principios en el altar de la paz.

En la negociación con la guerrilla sucede algo muy grave: y es que está desequilibrada en las ganas. Una de las partes tiene muchas más ganas, o mejor aún, tiene ganas, y la otra no. Las dos partes están negociando con las ganas del Establecimiento. Eso no puede terminar bien. El



deseo de buscar una salida negociada no debe conducir a confundir lo deseable con lo factible.

Por ausencia de una alternativa es que el paramilitarismo florece. Por la carencia de opciones institucionales efectivas regalamos el espacio de la lucha contrainsurgente a las fuerzas irregulares.

El Estado tiene la obligación de ofrecer, pero es ya, es de manera inmediata, no puede ser hipotética, no para mañana, seguridad y orden efectivo.

El gran reto del Estado es la articulación de esa opción que concilie su efectividad con el ordenamiento institucional y con los Derechos Humanos.

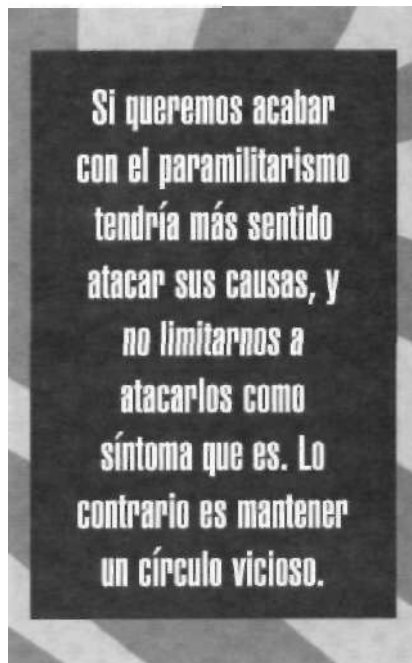
La torpeza e ingenuidad general, por la vía del contraste con el fenómeno paramilitar, lleva al despropósito de otorgarle a la guerrilla un lugar en el engranaje institucional a pesar de sus delitos atroces y sus vínculos con el narcotráfico.

Si queremos acabar con el paramilitarismo, no hay opción distinta a la recuperación de la vigencia institucional, con toda la fuerza del Estado, como valientemente lo exigió recientemente Eduardo Cifuentes, Defensor del Pueblo, rescatando no sólo los espacios que éste se ha tomado, sino los que se le han cedido a la guerrilla, pues son éstos precisamente los que el paramilitarismo arrebató. El paramilitarismo es la consecuencia de la falta de Estado, como también lo es la guerrilla.

Es que el paramilitarismo no sólo le disputa al Estado el monopolio de las armas o de la lucha contrainsurgente. También están monopolizando, y esto es muy grave, la interpretación de la necesidad de opciones de seguridad de la población, por culpa de un Establecimiento que por omisión y torpeza se ha convertido en causa y cómplice de estos fenómenos. Esa interpretación a la que el Gobierno le es ciego y renuncia a la iniciativa y al liderazgo de su población.

Si queremos acabar con el paramilitarismo, tendría más sentido atacar sus causas, y no limitarnos a atacarlo como síntoma que es. Lo contrario es mantener un círculo vicioso.

Planteada la situación en estos términos, y para ser coherentes, así como no se puede aceptar que los civiles recurran a vías distintas a las institucionales y a la convivencia con fuerzas ilegales, cabe preguntarse si no hay una contradicción en el otorgamiento de status político a grupos reconocidamente vinculados a los cultivos ilícitos y que cometen actos terroristas y delitos atroces, como el secuestro de esos mismos civiles.



Ya es hora de empezar a cuestionar el axioma de que el gran aporte de este proceso de paz es haber logrado involucrar a la comunidad internacional, con el supuesto de que quedarían al desnudo de la opinión mundial los desafueros de la guerrilla y de que la presión para negociar les resultaría inaguantable. No se capta ese resultado. En primer lugar, la guerrilla ha resultado impermeable a esa presión, que valga decir, tampoco ha tenido la firmeza previamente presupuestada.

Cabe preguntarse si la visión y comprensión que la comunidad internacional tiene de nuestro

conflicto guarda relación con nuestra realidad y con nuestros intereses.

Los Estados Unidos tienen una visión en exceso narcotizada del conflicto, mientras la Unión Europea tiene una óptica, por un lado, ingenuamente romántica y, por el otro, reviste una contradicción: Son duros y de derecha en el tratamiento del orden público hacia adentro y son de izquierda por nuestra cuenta.

El precio que estamos pagando por su ayuda para evadir nuestro compromiso, es dejarnos imponer el manejo, la agenda y la óptica sesgada y simplista del problema del narcotráfico y de los Derechos Humanos. Ellos lo saben e imponen las condiciones.

Ésta es la consecuencia de intentar ser como queremos que nos vean, renunciando a determinarlo nosotros. Se ha perdido la autodeterminación, porque ésta exige que uno sea dueño de su suerte y forje su propio destino.

Los países desarrollados, en todos los frentes juegan con dos naipes: uno con los países subdesarrollados y otro para ellos. Además del tema que nos ocupa, podemos mencionar que mientras nos impusieron la apertura económica y la reducción de nuestras débiles protecciones al sector agrícola, la Unión Europea actualmente aún dedica un 46% de su presupuesto total a subsidios agrícolas; Estados Unidos se rehusó a suscribir el protocolo ambiental de Kyoto, como también rehusa participar en la Corte Penal Internacional, a pesar de lo que expresa sobre Derechos Humanos.

El revuelo suscitado por las recientes confesiones del Senador Robert Kerrey, distinguido con las más altas condecoraciones por su participación en la guerra de Vietnam, sobre su responsabilidad de masacres de civiles, evidencia la dificultad del manejo de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en el desarrollo de guerras irregulares. Como si estos mismos derechos no se violaran con las guerras que actualmente libran lanzando bombas desde 30.000 pies de altura, donde las disyuntivas morales no se afrontan cara a cara.

Ese escenario general de confusión y doble moral es el que rodea la suerte del sector agropecuario, que es objeto de un extremo populismo y demagogia por parte de otros sectores de la producción nacional que creen que pueden negociar la paz sacrificándolo como prenda para preservar sus privilegios. Esa es la visión empresarial del conflicto. Como si ésta se redujera a una transacción económica.

Qué torpe y mezquina óptica. Como si la historia no enseñara que la contemporización, el sometimiento, no termina en negociación. De nada sirve congraciarse con quien ha demostrado un único objetivo: el poder.

Erróneamente se puede concluir que estos planteamientos persiguen establecer una crítica

al Gobierno. Al Presidente le he oído decir, con absoluta razón, que si se optara por una salida estrictamente militar la opinión le caería encima. Creo que está en lo cierto.

Lo que sí se pretende señalar es que algo, y muy de fondo, funciona mal en Colombia.

Me temo que la solución está más en el terreno de la política, de la historia, de la antropología, del comportamiento humano, que en el de la economía.

Gran rectificación y contribución ha hecho Amartya Sen al pensamiento económico, al señalar la relación entre desarrollo y libertad. Al aclararles a los economistas ortodoxos que el nivel de vida, la esperanza de vida, el ingreso per cápita y demás parámetros no son el objetivo en sí mismos, sino instrumentos para lograr la libertad a través del desarrollo.

Es como si Colombia tuviera una enfermedad colectiva del espíritu que le restara entereza para afrontar los retos que a lo largo de la historia otros países han superado.

No nos digamos más mentiras. La premisa de que este conflicto desemboca en un empate técnico es falsa. A pesar de los sacrificios y progresos de las Fuerzas Armadas, las fuerzas irregulares cada día controlan una mayor proporción del territorio nacional y, consecuentemente, sustituyen la autoridad institucional. Gobiernan, legislan y juzgan.

Decretan qué se puede hacer, producir y decir. En esos territorios ya no existe la libertad. El Estado no los controla.

La guerra se pierde frente a una guerrilla delictiva y poderosa que no tiene contemplaciones para someter a la población por la vía del terror. ¿No es ésta una Colombia fracturada en su soberanía? ¿No estamos acaso en presencia de un Estado que no es soberano?.

La solución de nuestra problemática es compleja y requiere de acciones en varios frentes. No tiene una solución única ni simple. Pero si se me pidiera una opinión, un único punto, diría que es en la

falta de compromiso que reside el problema. Esto no podemos seguir eludiéndolo.

En ningún orden de la vida nacional se materializa más dramáticamente este punto que en lo concerniente al servicio militar.

Lo traigo a colación por su dramático simbolismo sobre nuestra ausencia de compromiso y no por su repercusión militar, objeto de estudio en otro escenario.

En Colombia, los que tienen mucho que perder, capacidad para aportar y todas las oportunidades son protegidos por quienes no tienen nada y a quienes la sociedad les ha negado las oportunidades.

Me atrevo a afirmar que confrontar esa realidad, esa sola realidad, marcaría un decisivo cambio concreto de rumbo y de mentalidad. ¿Habrá en este salón diez personas que hayan prestado servicio militar de verdad? No en el Sinaí o de ayudante del General en la ciudad!. Es hora de que en Colombia se aborde el tema del servicio militar obligatorio igual para todos.

Esta situación es la máxima inequidad de la sociedad colombiana. Nuestra Constitución del 91 es pródiga en garantizar educación, vivienda, salud, trabajo. Resulta que quienes no tienen esas oportunidades son los más opcionados para prestar el servicio militar verdadero. Y a quienes nacen con todos los privilegios garantizados le añaden el de no prestar el servicio militar.

Hay respuestas evasivas para justificar esta injusticia. Que el Ejército se está profesionalizando con voluntarios, que la oferta es mayor a la demanda por parte del Ejército, y por lo tanto para qué sacrificar a unos bachilleres que además resultan ser soldados ineptos. Lo que quieran. El hecho es que el resultado final es injusto. El servicio militar termina siendo prestado por los

de ruana. En la práctica es discriminatorio. Hay toda suerte de racionalizaciones para sostener una injusticia. Mientras tengamos soldados no profesionales que están en el frente, éstos deben ser representativos de toda la sociedad colombiana. Mucho daño hace a la Sociedad el socavamiento institucional del compromiso y de la solidaridad.

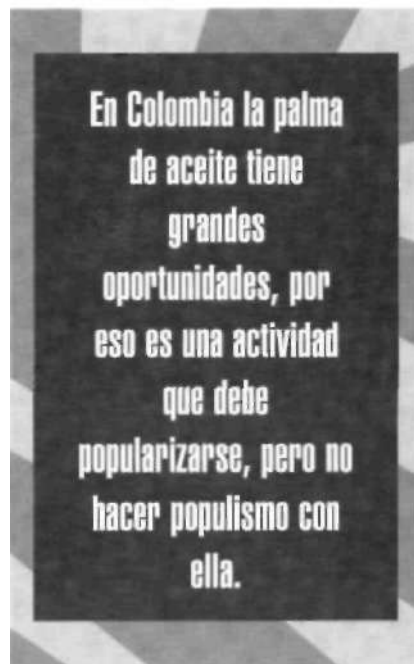
El día en que el hijo del ministro, del industrial, del banquero, del gerente, del comerciante, del académico preste servicio militar efectivo, ese día veremos al industrial, al banquero, al presidente gremial, al empleado, al patrón, al gerente, al comerciante preocupados por sus hijos en el frente y buscándole solución a los problemas del país. En ese momento se preocuparán por los hijos de la Patria en el Caquetá, en el Magdalena Medio, en Nariño, en Urabá.

Ese día, nuestra clase dirigente adquirirá un compromiso moral con el país. Ese día se acabará el jueguito del acomodo, del agache y de tanta ligereza. Ese día, las posiciones individualistas y ventajistas no vulnerarán las colectivas.

Ese día, la institucionalidad tendrá mayor representatividad y solidez, recuperándole espacios a la guerrilla y al paramilitarismo.

Ese día llegará a su fin la defensa de privilegios sin solidaridad con la Sociedad, que es la constante de nuestra vida en comunidad. Ese día tendremos una Sociedad más igualitaria, o mejor aún, más equitativa. Ese compromiso forzaré su extensión a todos nuestros actos y posiciones. Iré acompañado de una transformación de nuestra Sociedad.

Ese será el efecto más apreciable de esa medida. Reducirlo a su simple efecto militar lindaría en el simplismo. Su repercusión es mucho más amplia. Necesariamente transformará el quehacer cotidiano, el diario vivir. Tendrá una connotación inimaginable de choque pedagógico



para la sociedad colombiana, rescatándola de su indolencia e insolidaridad.

Quienes permanezcamos en el país, ese día no nos limitaremos a arriesgar un patrimonio, además tendremos la fuerza moral y un compromiso personal para arreglar los problemas de manera efectiva. A la guerrilla no le concederemos la reivindicación social y representatividad que sabemos que no merece, pero que actualmente concedemos porque no tenemos autoridad para no hacerlo.

Eso es lo que sucede. Por no estar comprometidos, estamos en una tenaza entre las presiones de la comunidad internacional y de la guerrilla. Cuando no se está dispuesto a asumir el compromiso, primero se pierde la autoridad, después la independencia y, por último, la libertad.

Ese día sí tendrá asidero el discurso sobre la cuota de sangre que aporta Colombia, y que la pone no como consecuencia de un compromiso, sino a pesar de la falta de éste, lo que indica que con la

evasión no lo eludimos. Finalmente, nos sacrificamos, pero sin pena ni gloria.

Si de compromiso queremos hablar, éstos son los términos de referencia.

Ese día se buscarán y encontrarán soluciones a los vergonzosos problemas del país. Se buscará la paz que retorne a los hijos sanos y salvos.

Y tendremos la autoridad para denunciar la doble moral del mundo desarrollado, esa doble moral que también aplicamos hacia adentro, que permite que por allá en los campos, bien lejos, los campesinos de la guerrilla se maten con los campesinos del ejército.

El día que asumamos el compromiso, descubriremos que sí podemos ganar la guerra. Y paradójicamente, que, quizás, es la única manera de ganarla sin librarla.

Muchas gracias....